



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, quince (15) de diciembre dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	SAUL ALONSO CARDONA LOPERA
DEMANDADO	GRUPO FAMILIA S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario
RADICADO NACIONAL	050013105014202300048 01
RADICADO INTERNO	374-23
ASUNTO	Apelación de auto que negó prueba de oficio solicitada por la parte demandante.
DECISIÓN	REVOCA

En la fecha señalada, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2° del art. 13 de la Ley 2213 de 2022, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Saul Alonso Cardona Lopera, se resuelve recurso de apelación frente a la decisión adoptada por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, mediante la cual negó prueba de oficio solicitada por la parte demandante.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda¹

Por medio de apoderado judicial Saul Alonso Cardona Lopera, formuló demanda ordinaria laboral contra Grupo Familia S.A.; pretendiendo en síntesis lo siguiente:

Se reconozca que entre las partes existió un verdadero contrato de trabajo a término indefinido, desde el 17 de septiembre de 2007 hasta el 31 de enero de 2020.

¹ 01PrimeraInstancia; 03. 2022-00048 DemandaConAnexos.pdf. Pág. 2

Como consecuencia **se condene** al pago de la: i) indemnización por despido sin justa causa, ii) indexación; iii) costas y agencias en derecho.

Fundamentó sus pretensiones señalando que² laboró en la empresa demandada como auxiliar de inventarios desde el 17 de septiembre de 2007 hasta el 10 de febrero de 2020, que el 3 de febrero de 2020 la demandada le realizó una prueba de determinación cualitativa de alcohol, lo cual arrojó un resultado positivo, sin embargo adujo que una vez conocido el examen evidenció que éste no cumplía los requisitos establecidos en la Ley 1696 de 2013, sostuvo que en sus más de 13 años de trabajar en la compañía nunca tuvo un llamado de atención.

Indicó que el 10 de febrero de 2020 recibió notificación de terminación unilateral de contrato de trabajo con justa causa, basando su decisión en el acontecimiento del 3 de febrero de 2020. Señaló que el 23 de octubre de la misma anualidad presentó derecho de petición a la demandada de copia de la convención colectiva de trabajo, documento que no se le entregó motivado en que no especificó cuál convención y a cuál organización sindical se refiere. Reiteró su solicitud el 5 de febrero de 2021, precisando que se trata de la convención colectiva de trabajo vigente para la fecha de despido de la demandante.

A su vez solicitó como prueba de oficio conforme al artículo 167, inciso 2 del Código General del Proceso ordenar a la demandada que aporte copia de la convención colectiva de trabajo vigente para el momento del despido del demandante junto con la constancia de su nota de depósito ante el Ministerio de Trabajo.

Mediante auto del 21 de febrero de 2022³, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, admitió la demanda, ordenó la notificación y reconoció personería al apoderado judicial del actor.

Una vez notificada⁴, la sociedad demandada contestó y se opuso a la totalidad de pretensiones de la demanda⁵, toda vez que el demandante laboró para la sociedad del 17 de septiembre de 2007 al 10 de febrero de 2020, bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido, cuya terminación obedeció a un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y reglamentarias, calificadas previamente como causal para dar por terminado dicho contrato entre las partes.

² 01PrimeraInstancia; 04. 2022-0048 AutoAdmite.pdf

³ 01PrimeraInstancia; 04Inadmite. pdf

⁴ 01PrimeraInstancia; 05. 2022-00048 ConstanciaNotificación. pdf

⁵ 01PrimeraInstancia; 06. 2022-00048 ContestacionDemanda.pdf

Mediante auto del 10 de octubre de 2022, se dio por contestada la demanda⁶.

Decisión objeto de recurso

El 7 de septiembre de 2023 en la audiencia regulada en el artículo 77 del CPTSS⁷, **el juez de instancia negó la prueba de oficio solicitada por la parte demandante.** Fundamentó su decisión en que el hecho noveno de la demanda, refiere que el demandante es conocedor de una convención colectiva, existe una regulación de plazos mínimos entre la jornada de trabajo y la toma de muestras de alcoholemia, y en principio es una prueba que no compete aportar a la demandada, añade que se trata de una afirmación del demandante, sin que se infiera de la contestación a la demanda ni de las pruebas aportadas por las partes que el contrato de trabajo estuviera regido por disposiciones convencionales.

Tampoco para efectos del despido se afirmó que el actor haya pertenecido a una organización sindical en específico, y que una convención colectiva lo cobije, pues al momento del despido se aplicó la normatividad establecida en el contrato y reglamento interno de trabajo, añade que no se establece a qué tipo de organización sindical estaba afiliado o era beneficiario, por tanto, no era obligación de la demandada suministrar este tipo de prueba, sino que una vez tuviese certeza de cuál era la organización sindical a la cual estaba afiliado y era beneficiario, debió solicitarla al Ministerio del Trabajo, y no lo hizo.

Recurso de reposición y en subsidio apelación⁸

Inconforme con lo decidido respecto a la negativa de decretar la prueba de oficio, el apoderado de la parte demandante, formuló recurso de alzada manifestando que se cumplió con la carga procesal establecida, ya que el 5 de febrero de 2021 solicitó expresamente a la entidad demandada la convención colectiva vigente para el momento del despido del demandante, sostuvo que el hecho de beneficiarse o no de la convención es un asunto para resolver de fondo al momento de dictarse sentencia, circunstancia que considera relevante para el proceso, máxime porque en los hechos de la demanda se narró que dentro de la misma convención colectiva del trabajo existe un artículo que invalidaba esa prueba de alcoholemia respecto a los tiempos y la última jornada de

⁶ 01PrimeralInstancia; 07. 2022-00048 AutoFljaAudiencia.pdf

⁷ 01PrimeralInstancia; 11. 2022-00048 VideoConActaArt77.pdf. Min 11:00

⁸01PrimeralInstancia; 11. 2022-00048 VideoConActaArt77.pdf. Min 14:00

trabajo desempeñada por el demandante, por tanto, es una prueba conducente respecto a lo que se debate en el caso Sub Júdice.

Adicionalmente sostiene que, el actor desconoce a cuál convención colectiva era beneficiario, y no necesariamente tenía que solicitarla al Ministerio del Trabajo, por estar dentro de las obligaciones de la sociedad tener dicho documento en su archivo logístico.

El A quo niega el recurso de apelación por las razones expuestas anteriormente y en su lugar concede el recurso de apelación en el efecto suspensivo.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

Una vez concedido el traslado a las partes para alegar de conclusión en esta sede, ambas omitieron descorrer traslado.

II. CONSIDERACIONES

La competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del literal B del artículo 15 del CPTSS y el numeral 4 del artículo 65 del referido código que se refiere al auto *“que niegue el decreto o la práctica de una prueba”*.

El A quo negó el decreto de la prueba de oficio al considerarla inconducente para el objeto del proceso y adicionalmente al contemplar que parte demandante no cumplió con la carga de solicitar el documento directamente al Ministerio del Trabajo. En ese orden, se debe recordar que para decretar una prueba se debe poder predicar que es legal, conducente, pertinente y útil; de no ser así, el juez deberá rechazarla conforme lo dispone el artículo 168 del CGP⁹.

Así mismo, al Juez le es exigible una conducta imparcial que pugne por la búsqueda de la verdad procesal, para lo cual debe hacer uso incluso de las facultades oficiosas que le permitan desentrañar dicha verdad¹⁰ y abstenerse de exigir a las partes cumplir con formalidades innecesarias.

⁹ Rechazo de plano: El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.

¹⁰ Artículos 48, 52 a 54 de CPTSS

De los anexos de la demanda, se observa que la parte demandante presentó el 5 de febrero de 2021, petición a la sociedad demandada, solicitando copia de la Convención Colectiva del Sindicato Mayoritario de trabajadores del Grupo Familia S.A. para el 2020¹¹. Sin embargo, también se evidencia que la empresa demandada dio respuesta el 5 de mayo de 2021¹², sin entregarle el documento solicitado argumentando que está sujeto a reserva legal al cual únicamente pueden tener acceso las partes que lo suscribieron y los trabajadores beneficiarios del mismo, expresando que el actor nunca fue beneficiario de ninguna Convención Colectiva de Trabajo, que en la sociedad no existe ningún sindicato mayoritario en los términos de Ley, y el sindicato que desde 2018 hace presencia en la planta de Medellín donde laboró el demandante no cuenta con ninguna convención.

De lo expuesto, se advierte que la parte demandante cumplió con la carga establecida en el inciso segundo del artículo 173 del C.G.P., que indica que *“El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.”*

Lo anterior, se conjuga con los deberes y responsabilidades que el artículo 78, numeral 10° del C.G.P., asigna a las partes y sus apoderados, al disponer que deberán *“Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”*.

Y, en concordancia con lo anterior, el artículo 43 numeral 4to. ibidem, señala como uno de los poderes de ordenación e instrucción de los operadores judiciales, es el *“exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso”*.

La Sala de Decisión No. 2 del Tribunal de Pereira, al analizar las anteriores normativas, en auto del 18 de octubre de 2017, radicado 2016-00279¹³, concluyó:

“... en cada una de las disposiciones citadas el interesado tiene la carga probatoria de aportar, en su debida oportunidad, los documentos e informes que pueda obtener sin la mediación judicial y el juez a su vez tiene el deber de decretar y practicar sólo aquéllas pruebas que las partes no se encuentran en la capacidad de presentar, bien sea porque i) no fue atendida la solicitud con la que

¹¹ 01PrimeraInstancia; 03. 2022-00048 DemandaConAnexos.pdf. Pág. 31 y 32

¹² 01PrimeraInstancia; 03. 2022-00048 DemandaConAnexos.pdf. Pág. 33 y 34

¹³ M.P. Dr. Julio César Salazar Muñoz

se buscaba obtenerlas por parte de las autoridades o de los particulares, ii) no fue suministrada a tiempo o, iii) le fue negada. ...

Adicionalmente debe añadirse que todo lo dicho no se opone a la facultad que en todo caso le asiste al juez para decretar pruebas de oficio”.

En este caso, se presentó petición requiriendo el documento que se pretende obtener con la prueba de oficio, a su vez se evidencia que, si bien la petición se respondió, esta no fue atendida de forma satisfactoria, ya que no le entregaron “la Convención Colectiva del Sindicato Mayoritario de trabajadores del Grupo Familia S.A. para el 2020”.

En el asunto concreto la parte demandada pretende que se declare que el despido fue injusto y en consecuencia se ordene el pago de la respectiva indemnización, en el hecho noveno se afirma que en la convención colectiva de trabajo, existe regulación de plazos mínimos entre la última jornada de trabajo realizada y la fecha de toma de muestras de alcoholemia, y que en su caso no se respetó dicho periodo mínimo, en ese sentido, observa la Sala que la tesis de la parte activa precisamente consiste en demostrar que el despido fue injusto, ya que omitieron tener en cuenta lo regulado en la convención colectiva, por tanto, desde un comienzo se vislumbra que la prueba solicitada sí guarda relación estrecha con el objeto del proceso y, por ende, resulta pertinente y conducente.

En tal sentido, la Sala no encuentra acertada la decisión objeto del recurso, pues al margen de que esta forme el convencimiento del juzgador en relación con los argumentos del llamado a juicio, deberá ser valorada al momento de tomar la decisión que en derecho corresponda.

Por lo anterior, se **revocará** la decisión emitida el 7 de septiembre de 2023, que denegó el decreto de una prueba de oficio pedida por la parte demandante, para en su lugar ordenar que ésta se decrete y adicionalmente se hagan los trámites pertinentes ante el Ministerio del Trabajo para que igualmente remita la respectiva convención colectiva.

III. COSTAS

Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación.

IV. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido el 7 de septiembre de 2023 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, por medio del cual se denegó el decreto de una prueba de oficio, para en su lugar ordenar que ésta se decrete y adicionalmente se hagan los trámites pertinentes ante el Ministerio del Trabajo para que igualmente remita la respectiva convención colectiva.

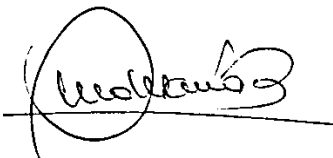
SEGUNDO: Sin costas.

Se ordena notificar por estados y devolver el expediente al Juzgado de origen para que continúe el trámite.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS N° 217 fijados hoy 18 de diciembre de
2023 a las 8:00AM

El secretario

Certifico que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS N° 218 fijados hoy 19 de diciembre de
2023 a las 8:00AM

El secretario